

## Acceso por administrativos a datos de salud. Informe 0248/ 2005

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 la realización por los consultantes, que ostentan la condición de auxiliares administrativos de determinadas tareas que implican el acceso por los mismos a determinados datos relacionados con la salud del centro sanitario en que prestan sus servicios.

En relación con los datos de salud, el artículo 7.6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, dispone que “podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto”.

A su vez, añade el artículo 8 que “sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 respecto de la cesión, las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad”.

En materia sanitaria, estas previsiones se concretan por el artículo 16.4 de la Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica que, referido al personal de administración, señala que “el personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias funciones”.

De la documentación aportada no puede determinarse terminantemente si existe norma contractual o convencional de la que se desprenda cuáles son las funciones específicamente atribuidas a los consultante, por lo que no es posible dar una respuesta definitiva a la cuestión planteada.

De este modo sólo en el caso de que las funciones a las que se refiere la consulta puedan ser desempeñadas por los consultantes, la realización de las mismas y el acceso a los datos de salud que dicho desempeño implica encontrarían cobertura en lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 41/2002 y, en consecuencia, en los artículos 7.6 y 8 de la Ley Orgánica 15/1999.

En todo caso, debe recordarse que el artículo 10 de la Ley Orgánica impone un deber de secreto a los consultantes, que habría de añadirse al que les correspondiera por razón de su actividad en el centro sanitario, indicando que “El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del

tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo”